



Excmo. Sr. D. Fernando Gimeno Marín  
Consejero de Hacienda y Administración Pública  
Gobierno de Aragón

Madrid, a 27 de julio de 2016

Estimado Consejero,

El pasado 6 de abril se remitió comunicación por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual, se activaban para la comunidad las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativas a la aprobación de la no disponibilidad de créditos y a la retención de los mismos que garantizara el cumplimiento del objetivo establecido.

En el Plan de ajuste que se acordó con la comunidad para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016 se concretaron dichos acuerdos de no disponibilidad, así como el conjunto de medidas y escenarios relativos a la evolución financiera del ejercicio 2016 compatibles con el objetivo de estabilidad del -0,7% incorporado en el Programa de Estabilidad comunicado a las instituciones comunitarias.

En todo caso, resulta imprescindible por parte de ambas Administraciones llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento del plan de ajuste acordado así como de la adecuada aplicación y suficiencia de los acuerdos de no disponibilidad adoptados en aplicación del citado artículo 25. A este respecto, y de acuerdo con los últimos datos disponibles en relación a la ejecución presupuestaria de tu comunidad observamos con preocupación la existencia de posibles riesgos y desviaciones en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presente ejercicio, tal y como hemos tenido ocasión de analizar en la videoconferencia que hemos mantenido esta misma semana.

Dichos riesgos se concentran fundamentalmente, por lo que se refiere al presupuesto de ingresos, en la evolución esperada de los ingresos relativos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, especialmente respecto al impacto de la reforma fiscal introducida en el presente ejercicio. Por lo que respecta al presupuesto de gastos se observa con preocupación la evolución registrada en materia de gastos de personal, incluso tras depurar el efecto del abono de parte de la paga extraordinaria del ejercicio 2012, así como en relación al gasto en bienes corrientes y servicios. Sin perjuicio de lo anterior, en la citada videoconferencia hemos tenido ocasión de recibir de vuestra parte la buena evolución experimentada sobre lo inicialmente previsto en relación a la evolución de los ingresos



derivados del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como a la enajenación de inversiones reales, lo que junto a la ejecución del Acuerdo de no disponibilidad acordado facilitará en gran medida la compensación sobre los riesgos actualmente observados.

En todo caso, esta apreciación sobre la existencia de riesgos y desviaciones se contempla igualmente en el último informe elaborado por la AIReF en relación al cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2016 en relación a la Comunidad Autónoma.

De esta manera, y atendiendo al momento del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos resulta de especial trascendencia la activación de las medidas necesarias para procurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de los efectos pretendidos y previstos por las medidas coercitivas aplicadas. A modo de ejemplo, y con el fin de procurar el adecuado cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, el Estado, adicionalmente a la instrumentación de un Acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros, ha procedido a adelantar al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

A este respecto, la Comunidad deberá comunicar y concretar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las actuaciones adoptadas desde su formulación para asegurar el cumplimiento del plan de ajuste acordado con el Ministerio, así como aquellas actuaciones adicionales que resulte necesario implementar y que permitan corregir cualquier posible desviación observada o prevista.

En cualquier caso, y con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, se requiere la remisión de información específica antes del próximo 5 de septiembre sobre las siguientes cuestiones:

- Líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista por la comunidad, con referencia a la fecha prevista de publicación y a los plazos límite en la asunción de compromisos de gasto adicionales, remitiendo información sobre los efectos estimados de dicha orden y la evaluación mensual de dichos efectos desde su adopción, conforme al modelo A24 disponible en el envío de los cuestionarios de la plataforma CIMCA.
- En la medida en que el artículo 25 anteriormente citado establece limitaciones al incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto dicha información será objeto de un seguimiento específico, se deberá remitir los informes a los que se refiere el artículo 10 y 12 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, así como la información adicional que a estos efectos se solicite específicamente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Información específica sobre las causas y motivos por el que los gastos o retribuciones de personal, descontado el efecto de la devolución de la paga extraordinaria del ejercicio





2012, puedan estar incrementándose (o se prevea dicho incremento a final de año) en tasas superiores al incremento general retributivo previsto en el 1%. A este respecto, y de apreciarse posibles desviaciones en la consecución del objetivo de estabilidad al cierre del ejercicio, habrán de indicarse las actuaciones previstas para dar cumplimiento a la condición D.2 del Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, publicada por Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo.

- Informe específico sobre el comportamiento registrado y esperado de los distintos ingresos tributarios, especialmente en lo relativo al efecto de la reforma fiscal introducida en el ejercicio 2015.
- Informe del órgano competente acreditativo del grado de avance de las operaciones de enajenación de activos inmobiliarios y su efecto en términos de capacidad o necesidad de financiación.
- Remisión del calendario para la materialización efectiva de los acuerdos de no disponibilidad comprometidos en el plan de ajuste acordado.

Por último, quiero trasladarte la importancia en la adopción de las decisiones necesarias que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos a este respecto, así como las implicaciones que su incumplimiento determina para cada una de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de responsabilidad regulado en el artículo 8 de la LOEPSF, conforme al cual cada Administración Pública asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales, y que ha sido objeto de desarrollo conforme a lo previsto en el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la información indicada, con el convencimiento de que la comunidad llevará a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio corriente.

Atentamente,

Antonio Beteta Barreda